

lans, Sociedad Cooperativa Limitada»; con NIF: F-43011782, para el perfeccionamiento de su bodega de elaboración y envasado de vinos, en La Figuera (Tarragona), acogiéndose a los beneficios previstos en la Orden Ministerial de este Departamento de 20 de septiembre de 1983, y demás disposiciones dictadas para su ejecución y desarrollo. Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Declarar incluido en Zona de Preferente Localización Industrial Agraria, el perfeccionamiento de referencia, al amparo de lo dispuesto en la Orden Ministerial de este Departamento de 20 de septiembre de 1983.

Segundo.—Conceder a la citada empresa, para tal fin, los beneficios solicitados aún vigentes entre los relacionados en el artículo 3.º y en el apartado uno del artículo 8.º del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, en la cuantía máxima que en el mismo se expresa, excepto los relativos a Impuesto General sobre Tráfico de Empresas, derechos arancelarios, impuesto de compensación de gravámenes interiores, cuota de licencia fiscal durante el periodo de instalación, arbitrios.

Tercero.—Aprobar el proyecto técnico presentado, con un presupuesto, a efectos de concesión de beneficios de trece millones ciento setenta y cuatro mil ciento setenta y tres pesetas (13.174.173 pesetas).

Cuarto.—Asignar para la ejecución de dicho proyecto, con cargo a la aplicación presupuestaria 21.09.772, del ejercicio económico de 1990, programa 712-A: Organización en común de la Producción y Comercialización Agraria y Pesquera. Fomento de Entidades Asociativas para el Desarrollo de la Agroindustria, una subvención equivalente al 20 por 100 del presupuesto que se aprueba, la cual alcanzará como máximo la cantidad de dos millones seiscientos treinta y cuatro mil ochocientos treinta y cuatro pesetas (2.634.834 pesetas).

Quinto.—Conceder un plazo hasta el día 30 de octubre de 1990, para que la empresa beneficiaria justifique las inversiones efectuadas en la realización de las obras e instalaciones previstas en el proyecto que se aprueba, y realice la inscripción en el correspondiente Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias.

Sexto.—Hacer saber que en caso de posterior renuncia a los beneficios otorgados o incumplimiento de las condiciones establecidas para su disfrute, se exigirá el abono o reintegro, en su caso, de las bonificaciones o subvenciones ya disfrutadas. A este fin, quedarán afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos o instalaciones de la empresa titular, por el importe de dichos beneficios o subvenciones, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. I para su conocimiento y efectos.

Madrid, 22 de junio de 1990.—P. D. (Orden Ministerial 23 de julio de 1987), la Directora general, Carmen Lizárraga Madruño.

Ilma. Sra. Directora general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

**19178** *ORDEN de 25 de junio de 1990 por la que dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 1824/1986, interpuesto por don Antonio Nogales Blasco.*

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 9 de noviembre de 1989, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo número 1824/1986, interpuesto por don Antonio Nogales Blasco, sobre reconocimiento de categoría de Sobreguarda y abono de emolumentos inherentes a dicha categoría, sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que, estimando el recurso interpuesto por don Antonio Nogales Blasco, contra la desestimación del recurso de alzada por Resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de fecha 29 de julio de 1986, formulado contra la Resolución de 21 de enero del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, que desestimó la petición del recurrente de reposición en la categoría de Sobreguarda de dicho Organismo y abono de emolumentos inherentes a dicha categoría, debemos declarar y declaramos no ser conformes a derecho tales resoluciones, anulándolas en su totalidad y reconociendo al recurrente su derecho a ser repuesto en su categoría funcional de Sobreguarda del ICONA, desde que dejó de serle reconocida, con los complementos y demás beneficios económicos inherentes a tal categoría, abonándole los dejados de percibir desde que fue privado de ella; sin hacer condena en costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la precitada sentencia.

Madrid, 25 de junio de 1990.—P. D. (Orden de 23 de julio de 1987), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director de ICONA.

**19179** *ORDEN de 25 junio de 1990 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 2837/1988 interpuesto por don Jesús del Castillo Alfonso.*

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 7 de marzo de 1990, sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 2837/1988 interpuesto por don Jesús del Castillo Alfonso, sobre expediente disciplinario; Sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto al amparo del procedimiento especial y sumario de la Ley 62/1978 de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, por el Procurador señor Ferrer Recuero, en nombre y representación de don Jesús del Castillo Alfonso contra el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debemos declarar y declaramos que la resolución recurrida del Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de fecha 29 de marzo de 1988 no afecta al derecho a un «Juez Predeterminado por la Ley», al que se refiere el artículo 24.2 de la Constitución, sin más y con imposición de costas al recurrente por ser preceptivas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la precitada sentencia que ha sido apelada por la parte recurrente y admitida por el Tribunal Supremo en un solo efecto.

Madrid, 25 de junio de 1990.—P. D. (Orden Ministerial de 23 de julio de 1987), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

**19180** *ORDEN de 25 junio de 1990 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 1073/1989 interpuesto por la «Empresa Aceites y Proteínas, Sociedad Anónima».*

Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 26 de enero de 1990, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo número 1073/1989 interpuesto por «Aceprosa», «Arlesa», «Simsa», «Cindasa», «Kelsa» y «Acevesa», sobre adquisición de aceite crudo de soja; Sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de las entidades «Aceprosa», «Arlesa», «Simsa», «Cindasa», «Kelsa» y «Acevesa» contra la resolución de la Dirección General del Senpa de 24 de octubre de 1985 ratificada en reposición por las de 17 de enero de 1986 que desestimaban las reclamaciones acumuladas de los recurrentes sobre determinación del precio de compra fijado en los contratos de compraventa suscritos con el Senpa el 11 de enero de 1984, que se confirman y ratifican por estimarse conformes a derecho sin imposición de costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la precitada Sentencia.

Madrid, 25 de junio de 1990.—P. D. (Orden Ministerial de 23 de julio de 1987), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA.

**19181** *ORDEN de 25 junio de 1990 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 82.240 interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 41.408 promovido por doña Natividad Maté Solarano y otros.*

Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 16 de febrero de 1990, sentencia firme en el recurso de apelación número 82.240 interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 41.408 promovido por doña Natividad Maté Solarano y otros, sobre concentración parcelaria en la zona de Torresandino (Burgos); Sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el representante de la Administración contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 4 de junio de 1982 y desestimando el recurso

de apelación interpuesto por la representación procesal de doña Natividad Maté Solarano y demás personas en el encabezamiento de esta sentencia enumeradas contra la ya mencionada sentencia, debemos revocar y revocamos la mencionada sentencia en lo que tenía de estimatoria y la confirmación en cuanto era desestimatoria, no haciéndose especial declaración de condena respecto de las costas causadas en ambas instancias.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la precitada Sentencia.

Madrid, 25 de junio de 1990.—P. D. (Orden Ministerial, de 23 de julio de 1987), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del IRYDA.

**19182** *ORDEN de 25 junio de 1990 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 47.659 interpuesto por don Jacinto Guijarro Peña.*

Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 21 de marzo de 1990, sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 47.659 interpuesto por don Jacinto Guijarro Peña, sobre concentración parcelaria; Sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido:

Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jacinto Guijarro Peña, representado por la Procuradora doña Africa Martín Rico contra la Orden del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de 17 de marzo de 1986 y contra el Acuerdo de la Presidencia del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario de fecha 28 de diciembre de 1984, sobre la Concentración Parcelaria de la Zona de Castro de Fuentidueñas (Segovia), a que las presentes actuaciones se contraen; y confirmar las citadas resoluciones por su conformidad a Derecho, en cuanto a la motivación impugnatoria aquí examinada.

Sin especial condena en costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la precitada sentencia que ha sido apelada por la parte recurrente y admitida por el Tribunal Supremo en un solo efecto.

Madrid, 25 de junio de 1990.—P. D. (Orden Ministerial, de 23 de julio de 1987), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del IRYDA.

**19183** *ORDEN de 25 junio de 1990 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 46.921 interpuesto por «Pensos del Duero, Sociedad Anónima».*

Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 26 de marzo de 1990, sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 46.921 interpuesto por «Pensos del Duero, Sociedad Anónima» sobre sanción multa por infracción en materia de piensos; Sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Guinea y Gauna, en nombre y representación de «La Compañía Mercantil Pensos del Duero, Sociedad Anónima» contra las Resoluciones a que se contraen las presentes actuaciones, debemos confirmarlas, por ser conformes a Derecho, en todo aquello que no se oponga al pronunciamiento de considerar impuesta una sanción de 50.000 pesetas, con todos los efectos inherentes a esta declaración. Sin hacer una expresa imposición de costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la precitada sentencia que ha sido apelada por el Abogado del Estado y admitida por el Tribunal Supremo en un solo efecto.

Madrid, 25 de junio de 1990.—P. D. (Orden Ministerial, de 23 de junio de 1987), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

**19184** *ORDEN de 28 de junio de 1990 por la que dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 47.433 interpuesto por don Ramón Flores Sánchez.*

Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 5 de abril de 1990, sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 47.433 interpuesto por don Ramón Flores Sánchez, sobre concentración parcelaria; sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallo: En atención a todo lo expuesto la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido estimar el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de don Ramón Flores Sánchez contra la Orden de 18 de julio de 1986, del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 25 de septiembre de 1984 de la Presidencia del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario por la que se aprobaron las bases de concentración de la zona de Casas del Monte, a que las presentes actuaciones se contraen, y anular, como anulamos, dichas Resoluciones impugnadas en el extremo objeto de recurso por su disconformidad a Derecho, declarando, en consecuencia, procedente la exclusión de la concentración parcelaria de la zona de Casas del Monte (Cáceres) de las parcelas 21, 22 y 29 del polígono 7 de dicha concentración.

Sin expresa imposición de costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la precitada sentencia que ha sido apelada por el Abogado del Estado y admitida por el Tribunal Supremo en un solo efecto.

Madrid, 28 de junio de 1990.—P. D. (Orden de 23 de julio de 1987), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del IRYDA.

**19185** *ORDEN de 28 de junio de 1990 por la que dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), en el recurso contencioso-administrativo número 962/1986, interpuesto por don Anastasio Fernando Modrego Vitoria.*

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), con fecha 18 de mayo de 1990, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo número 962/1986, interpuesto por don Anastasio Fernando Modrego Vitoria, sobre provisión de puestos de trabajo de libre designación; sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallo: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Anastasio Fernando Modrego Vitoria, funcionario, contra denegación presunta, por silencio administrativo, de recurso interpuesto en vía administrativa por don Anastasio Fernando Modrego Vitoria, contra Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 13 de noviembre de 1985, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 274, de 15 de noviembre, por la que se anuncia la provisión de determinados puestos de trabajo, entre otros, el de Secretario de la Cámara Agraria Provincial de Soria, de la que es titular el recurrente, en situación de Servicios Especiales por razón de su condición de parlamentario, y por ende, declarar que dichos actos se ajustan a derecho; todo ello sin apreciarse méritos que determinen un expreso pronunciamiento sobre el pago de las costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la precitada sentencia.

Madrid, 28 de junio de 1990.—P. D. (Orden de 23 de julio de 1987), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del IRA.

**19186** *ORDEN de 28 de junio de 1990 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número 782/1988, interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 44.497, promovido por «Almacenes Núñez, Sociedad Anónima».*

Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 13 de marzo de 1990, sentencia firme, en el recurso de apelación número 782/1988, interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 44.497, promovido por «Almacenes Núñez, Sociedad Anónima», sobre extinción del plazo pactado de contrato de arrendamiento del tanque número 9 para el almacenamiento de alcohol, sentencia cuya parte dispositiva dice así: